EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Proyecto de Directiva “Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio”

I. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA

1.1. OBJETO

El proyecto normativo tiene por objeto definir los lineamientos que rigen las acciones de supervisión del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) –*hoy Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)*–, en cumplimiento de las funciones establecidas en la normativa de contrataciones públicas.

1.2. FINALIDAD

Tiene por finalidad establecer las disposiciones que rigen las acciones de supervisión realizadas por el OECE, a fin de identificar riesgos y transgresiones a la normativa de contratación pública.

1.3. MARCO JURÍDICO Y JUSTIFICACIÓN

El fundamento constitucional del régimen de contratación pública se encuentra regulado en el artículo 76 de la Constitución Política del Perú, en virtud del cual “[l]as obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes”; la citada disposición agrega que “[l]a contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La Ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades”.

Sobre la misma disposición, el Tribunal Constitucional ha expuesto que “la contratación pública tiene un cariz singular que la diferencia de cualquier acuerdo de voluntades entre particulares, ya que, al estar comprometidos recursos y finalidades públicas, resulta necesaria una especial regulación que permita una adecuada transparencia en las operaciones”¹.

Dicho esto, de acuerdo con la Vigésimo Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32069, dicha norma entrará en vigencia a los noventa días calendario contados a partir del día siguiente a la publicación de su Reglamento, excepto los numerales 1 y 2 de la Décima Tercera, Décima Sexta, Décima Novena y Vigésima Octava Disposiciones Complementarias Finales, así como la Única Disposición Complementaria Modificatoria, que entran en vigor a partir del día siguiente de la publicación de dicha ley en el diario oficial El Peruano.

Cabe indicar que la Décimo Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, incorporó el numeral 3 en la Décima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32069. El mencionado numeral regula lo siguiente:

¹ Fundamento 25 de la sentencia Exp. 00002-2021-PI/TC.

“3. El OSCE y Perú Compras, a partir de la publicación del reglamento, gestionan y aprueban las directivas, los lineamientos, los instrumentos de gestión, y/o cualquier normativa para el desarrollo y complemento de la presente ley. Asimismo, el OSCE propone y gestiona la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, y elabora, gestiona y aprueba su Texto Único de Procedimientos Administrativos. La vigencia de estos dispositivos está condicionada a la entrada en vigor de la ley y el reglamento.”

Al respecto, resulta oportuno indicar que el numeral 1.1 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo que corresponde al principio de legalidad señala que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

Dicho esto, a través de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, se establece en el literal b) numeral 11.3 del artículo 11, la función supervisora del OECE, señalando que este se encuentra a cargo de la supervisión de forma selectiva o aleatoria, incluso a pedido de parte, de la gestión de los procesos de contratación, incluyendo los contratos menores.

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7, el cual establece que la supervisión del OECE busca identificar riesgos y transgresiones a la normativa de contratación pública que impidan el cumplimiento de la finalidad pública de los procesos de contratación, con énfasis en la promoción del valor por dinero y la competencia efectiva. En adición a ello, se establece cuáles son las contrataciones objeto de supervisión de oficio del OECE, conforme a los criterios establecidos en el Plan Anual de Supervisión y Asistencia Técnica, precisando en su artículo 8 que, respecto a los supuestos excluidos sujetos a supervisión del OECE, la supervisión se encuentra referida a la configuración del supuesto de exclusión, el cumplimiento de los principios contemplados en el artículo 5 de la Ley y, en el caso de los regímenes especiales, el cumplimiento de la normativa especial de contrataciones públicas.

Así pues, actualmente el OSCE cuenta con habilitación legal para la emisión de directivas y/o los lineamientos y normativa complementaria, evidentemente, en el ámbito que faculta una norma habilitante, tanto sea la Ley N° 32069 o su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-MEF.

Asimismo, la presente propuesta se alinea con lo dispuesto en la Décima Tercera y la Vigésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32069, modificada con la Ley N° 32187, que habilita al OSCE, a partir de la publicación del Reglamento de la Ley N° 32069, a gestionar y aprobar las directivas y/o los lineamientos y normativa complementaria, que permita el desarrollo y complemento de la Ley N° 32069.

II. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA NORMATIVA

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO

De acuerdo con el problema público identificado en la exposición de motivos del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado

por Decreto Supremo N° 009-2025-EF², se ha advertido que el marco normativo vigente no permite que las entidades contratantes enfrenten los diversos retos que se presentan en materia de contrataciones públicas.

Asimismo, se advierte que el marco normativo actual referido a las acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio, no se encuentra acorde con las disposiciones con la Ley N° 32069 y su Reglamento.

2.2. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN FÁCTICA QUE SE PRETENDE REGULAR O MODIFICAR

De acuerdo con el marco normativo vigente a la fecha, el OSCE cuenta con la Directiva N° 010-2019-OSCE/CD “Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio”, aprobada por Resolución N° 062-2019-OSCE/PRE.

La mencionada Directiva es de cumplimiento obligatorio por los proveedores del Estado, participantes y demás recurrentes, las Entidades sujetas a supervisión conforme a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, u otra norma en la cual se disponga la función supervisora al OSCE, así como los órganos de línea competentes.

2.3. ANÁLISIS SOBRE LA NECESIDAD, VIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DEL PROYECTO NORMATIVO

El artículo 11 de la Ley N° 32069 establece en el literal b) del numeral 11.3, la función supervisora del OECE, señalando que este se encuentra a cargo de la supervisión de forma selectiva o aleatoria, incluso a pedido de parte, de la gestión de los procesos de contratación, incluyendo los contratos menores.

Ahora bien, debemos señalar que la función supervisora del OECE se enmarca dentro de la actividad de fiscalización regulada en el numeral 228-A.1 del artículo 228-A de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la cual constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos.

Es así que la Directiva propuesta busca establecer los lineamientos para el ejercicio de la actividad de fiscalización del OECE, la misma que se encuentra contemplada en el literal b) del numeral 11.3 del artículo 11 de la Ley N° 32069. Cabe señalar que a la fecha el OECE no cuenta con lineamientos establecidos para la tramitación de una acción de supervisión, siendo que con la regulación establecida en la Ley N° 32069 y su Reglamento se advierte que:

- a) Existe un vacío procedimental en las acciones de supervisión de parte: la Ley N° 32069 y su Reglamento no brindan información concisa respecto a las solicitudes de supervisión a pedido de parte aplicables a cada caso en particular; así como, no establece el procedimiento para la tramitación

² Ver en: <https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2025/Enero/22/EXP-DS-009-2025-EF.pdf>.

de las mismas, limitando las acciones del OECE en la medida que no existe un procedimiento de atención a estas.

- b) No existe regulación alguna en lo referido a las acciones de supervisión de oficio.

Ahora bien, en cuanto al sustento referido al contenido de la Directiva propuesta, se indica lo siguiente:

1. En el numeral I se regula la finalidad de la Directiva propuesta, la cual se encuentra dirigida a establecer las disposiciones que rigen las acciones de supervisión que realice el OECE, a fin de detectar riesgos y transgresiones en los procesos de contratación que realicen las Entidades contratantes, en el marco de la función supervisora establecida en el literal b) del numeral 11.3 del artículo 11 de la Ley N° 32069.
2. En el numeral II se regula el objeto de la Directiva propuesta, el cual es definir los lineamientos que rigen las acciones de supervisión que realice el OECE, en cumplimiento de las funciones previstas en la normativa de contrataciones públicas.
3. En el numeral III se establece el alcance de la directiva siendo que, al constituir el presente documento una normativa de alcance general, abarca a las Entidades contratantes sujetas a la supervisión del OECE, conforme a los alcances establecidos en la Ley u otra normativa especial en la cual se disponga la función supervisora del OECE; así como, para los recurrentes y unidades de organización competentes.
4. El numeral IV contiene las normas legales vigentes y relevantes que sustentan el contenido de la Directiva, siendo estas:
 - Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
 - Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.
 - Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
5. El numeral V establece las definiciones indispensables que facilitan la comprensión cabal del contenido de la Directiva, estando entre estas la de los tipos de supervisión que realiza el OECE, esto es, supervisión a pedido de parte y supervisión de oficio, de acuerdo al origen que haya tenido la acción iniciada.
6. Asimismo, se establece el concepto de entidad contratante, a efectos de delimitar el ámbito de supervisión a aquellas señaladas en el numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley N° 32069.
7. A su vez, establece la definición de informe macro, que implica el resultado de la supervisión de oficio realizada a un grupo definido de Entidades contratantes, de procesos de contratación u objetos de contratación respecto a una actividad específica; así como también establece la definición de solicitud de supervisión, así como de

recurrente, a efectos de delimitar a los sujetos que pueden presentar una solicitud de supervisión.

8. En el numeral VI se establecen las siglas que se utilizarán a lo largo del contenido de la Directiva.
9. El numeral VII contempla las disposiciones generales de la Directiva, referidas: i) al ámbito de supervisión del OECE, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 11.3 del artículo 11 de la Ley N° 32069; ii) a la administración de la información remitida por los recurrentes en el marco de una supervisión a pedido de parte, y iii) a la responsabilidad de la remisión de información que sea requerida a las Entidades contratantes, de conformidad con el numeral 10.2 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 32069.
10. El numeral VIII contiene las disposiciones específicas de la directiva, estableciendo los siguientes lineamientos de acuerdo al tipo de supervisión:

a) Supervisión a pedido de parte:

- Establece los requisitos con los que debe contar la solicitud de supervisión a pedido de parte, los cuáles constituyen la información mínima³ con la cual debe contar el OECE para el inicio de la acción de supervisión, así como para la notificación del resultado de la acción al recurrente.
- Establece que la solicitud de supervisión podrá ser presentada en cualquier etapa del procedimiento de selección.
- Establece los criterios en base a los cuáles el OECE priorizará las acciones de supervisión, considerando para ello el estado actual del proceso de contratación, la gravedad de los riesgos o transgresiones a la normativa de contratación pública advertidos, su repercusión en el cumplimiento de los fines de la contratación, la conducta del recurrente en el proceso de contratación y las vías legales con las que cuentan los participantes y/o postores para la atención del caso específico.
- Establece el procedimiento a seguir en caso se detecte que el procedimiento objeto de la solicitud de supervisión se encuentre pendiente de emisión de pronunciamiento por parte de la entidad, debido a la elevación de cuestionamiento al pliego de absolución de consultas y/u observaciones y/o a las bases integradas; o, pendiente de resolución por la interposición de recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones Públicas o la Entidad, a efectos de que dichas áreas puedan tener dichos cuestionamientos en consideración al momento de emitir el respectivo pronunciamiento o resolución, en el marco de sus competencias.
- Establece que, en caso se detecte que el cuestionamiento se encuentra referido al incumplimiento de las disposiciones de una

³ Ver artículo 113 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

resolución emitida por el Tribunal de Contrataciones Públicas o algún supuesto de infracción pasible de sanción de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 32069, corresponde su derivación a dicho órgano colegiado.

Ello atendiendo a que el literal b) del numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069 ha establecido como una de las funciones del Tribunal de Contrataciones Públicas: "*Aplicar las sanciones de multa, así como la inhabilitación temporal y definitiva a los participantes, postores, contratistas o subcontratistas que sean pasibles de sanción*"; así como, el artículo numeral 313.3 del artículo 313 de su Reglamento ha establecido que, cuando la entidad contratante no cumpla con lo dispuesto en la resolución del Tribunal de Contrataciones Públicas en el marco de un recurso de apelación, dicho órgano colegiado comunica el referido hecho a la Contraloría General de la República.

- Establece los supuestos de improcedencia de la solicitud de supervisión, así como el procedimiento para su notificación al recurrente, siendo que los supuestos considerados son aquellos en los cuáles la normativa establece una vía determinada para la presentación del cuestionamiento, y que además haya establecido los órganos competentes para avocarse al caso, por lo que en dichos casos la Dirección de Gestión de Riesgos no cuenta con facultades para poder pronunciarse respecto a dichos cuestionamientos. Los supuestos contemplados son los siguientes:

- Cuando los hechos materia de supuesta transgresión pudieran ser materia de consulta y/u observación a las bases o de elevación al OECE, de corresponder.

Ello atendiendo a que el Reglamento dispone que los participantes pueden formular observaciones y/o consultas a las bases en los procedimientos de selección que contemplen dicha etapa, a través de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (PLADICOP), mecanismos que permiten adecuar las Bases a la normativa que rige las contrataciones públicas y demás disposiciones normativas relacionadas con el objeto de la convocatoria y que deben ser absueltos por el oficial de compra o el comité o la dependencia encargada de las contrataciones (DEC); así como el Reglamento ha establecido el procedimiento específico a seguir para la elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones ante el OECE.

- Cuando algún recurrente cuestione la admisión, precalificación, evaluación, y calificación de las ofertas, así como aspectos referidos al perfeccionamiento del contrato, según corresponda.

Ello atendiendo a que el artículo 72 de la Ley y los artículos pertinentes del Reglamento establecen que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a

la interposición del recurso de apelación, mediante el cual se impugnan los actos dictados desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato, como es el acto de admisión, evaluación, precalificación y calificación, así como al perfeccionamiento del contrato. Asimismo, según el artículo 302 del Reglamento, el recurso de apelación únicamente puede ser conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones Públicas y por la Autoridad de la Gestión Administrativa, según sea el caso.

- Cuando se refieran a controversias surgidas durante la ejecución contractual y que puedan ser materia de los medios de solución de controversias señalados en la normativa de contratación pública.

Ello atendiendo a que conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 32069, las controversias que surjan durante la ejecución contractual solo pueden ser resueltas mediante: a) la junta de prevención y resolución de disputas, b) conciliación, c) arbitraje, y d) otros que se prevean en los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, de acuerdo con las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

- Establece el procedimiento a seguir para la tramitación de la acción de supervisión, disponiendo los plazos para el requerimiento de información y/o descargos a la Entidad contratante cuestionada u opinión técnica de otra Entidad distinta a la cuestionada, así como el plazo para la emisión del documento de supervisión y su notificación al recurrente y/o a la Entidad contratante cuestionada, en caso corresponda.

b) Supervisión de oficio

- En primer lugar, se establece una clasificación de las acciones de supervisión de oficio en función a la naturaleza de la misma:
 - Acción de supervisión de oficio programada, cuando se desarrolla conforme a la programación y parámetros establecidos en el “Plan Anual de Supervisión y Asistencia Técnica” aprobado por el OECE, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 32069.
 - Acción de supervisión de oficio no programada, iniciada a partir de información proveniente de fuentes internas o externas relacionadas con posibles riesgos o transgresiones en las contrataciones.
- Establece el procedimiento a seguir para la tramitación de la acción de supervisión, disponiendo los plazos para el requerimiento de información y/o descargos a la Entidad contratante supervisada u opinión técnica de otra Entidad distinta a la supervisada, así como los lineamientos para la emisión del documento de supervisión y su notificación a la Entidad

contratante supervisada, así como al Sistema Nacional de Control o Tribunal de Contrataciones Públicas, en caso corresponda.

- Finalmente, establece los lineamientos para llevar a cabo acciones de supervisión de oficio macro, las mismas que buscan la identificación de patrones comunes que podrían vulnerar la normativa de contratación pública o generar riesgos que puedan afectar el desarrollo idóneo de las compras públicas, como resultado de la evaluación de diversos procesos de contratación ejecutados por una o varias entidades contratantes, o de la consolidación del resultado de distintas acciones de supervisión previamente realizadas.

11. El numeral IX establece como disposición final que los documentos que se emitan con ocasión de una supervisión y contengan disposiciones para la Entidad, se comunicarán a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), siendo que, en caso no resulte posible su comunicación a través de dicha vía, se notificará a través de la mesa de partes de la Entidad.

2.4. INFORMES TÉCNICOS

- Mediante Informe N° D000008-2025-OSCE-DGR de fecha 26 de febrero de 2025, la Dirección de Gestión de Riesgos sustenta la propuesta de Directiva “Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio”.
- Con Informe N° D000023-2025-OSCE-DTN de fecha 3 de marzo de 2025, la Dirección Técnico Normativa propone el proyecto de Directiva “Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio”; señalando que la misma se encuentra dentro de los alcances de la Ley, así como en el marco de sus competencias, por lo que, emite opinión favorable, a efectos de que se proceda con la publicación del proyecto normativo.
- Mediante Informe N° D000011-2025-OSCE-DGR de fecha 3 de marzo de 2025, la Dirección de Gestión de Riesgos remite información complementaria para el sustento de la propuesta de Directiva “Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio”.

III. ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE

Respecto al análisis de impacto regulatorio, corresponde señalar que el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-2025-PCM (Reglamento de la LGMCR), tiene por finalidad, entre otras, fortalecer la implementación de la Mejora de la Calidad Regulatoria en las entidades públicas bajo el ámbito de aplicación de la Ley, fomentar el desarrollo de una cultura regulatoria y el buen gobierno para mejorar la calidad de las normas vigentes y futuras, promover la participación activa y efectiva de la ciudadanía, el sector privado, la academia y otros grupos de interés en el ciclo regulatorio, e impulsar la eficiencia, eficacia, transparencia, coherencia, simplicidad, flexibilidad, agilidad, neutralidad y rendición de cuentas en el ejercicio de la función normativa del Estado.

Para tal efecto, el numeral 33.2 del artículo 33 del Reglamento de la LGMCR establece que la entidades públicas tienen la obligación de aplicar un AIR Ex Ante

como herramienta de análisis previo, cuando el proyecto normativo de carácter general establezca y/o modifique una obligación, condición, requisito, responsabilidad, prohibición, limitación y/o cualquier otra regla que imponga exigencia(s): a) que genere(n) o modifique(n) costos en su cumplimiento por parte de las personas; y/o, b) que limite(n) el ejercicio, otorgamiento y/o reconocimiento de derechos de las personas, restringiendo el desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.

Por su parte, el numeral 41.2 del artículo 41 del citado Reglamento de la LGMCR, establece lo siguiente:

“Artículo 41.- Supuestos que están fuera del alcance de la obligación de presentar expediente AIR Ex Ante a la CMCR

(...)

41.2 Excepcionalmente, otras materias o proyectos regulatorios que la CMCR, previa evaluación y de manera fundamentada, en base a la interpretación del alcance del presente Reglamento, señale que se encuentran fuera del alcance del AIR Ex Ante establecido en el numeral 33.2 del artículo 33 del presente Reglamento. De manera trimestral la SGP difunde, en la sede digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, los resultados obtenidos de las excepciones presentadas.

(...).”

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 41.3 del artículo 41 del Reglamento de la LGMCR, la entidad pública, a través del oficial de mejora de calidad regulatoria, canaliza de manera obligatoria y mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR), los proyectos normativos que se encuentren en el supuesto señalado en el citado numeral 41.2 del artículo 41, así como, aquellos en los que se presenten dudas razonables sobre la aplicación del AIR Ex Ante, a fin de que la CMCR emita un pronunciamiento, en un plazo máximo de tres (03) días hábiles contado a partir del día siguiente de recibida la consulta.

En este orden, la Directiva propuesta constituye una disposición normativa de carácter general, y no incorpora ni modifica reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.

A su vez, cabe señalar que el objetivo de la presente Directiva es establecer lineamientos para el ejercicio de la actividad de fiscalización del OECE establecida en el numeral 11.3 del artículo 11 de la Ley N° 32069, y dichas acciones de supervisión reguladas en la directiva no afectan la esfera jurídica del administrado, es decir, no producen efectos jurídicos individuales o individualizables sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados, sino que están dirigidos a verificar que las actuaciones realizadas por los organismos u órganos de la administración pública se den dentro del marco legal establecido.

Por lo expuesto, no resulta obligatorio realizar el AIR Ex Ante respecto a la presente propuesta, conforme al Reglamento de la LGMCR.

IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS CUANTITATIVOS Y/O CUALITATIVOS DE LA NORMA

El impacto de la presente norma no solo debe evaluarse en términos del costo económico y presupuestal del Estado, sino también en los beneficios tangibles e intangibles que genera. Maxime si conforme a lo indicado en la exposición de motivos del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF⁴, los beneficios que trae el nuevo marco normativo contribuirán a mejorar las contrataciones públicas y por lo tanto la calidad de los bienes, servicios y obras que usarán o recibirán los ciudadanos, además de coadyuvar a la consecución de las finalidades y/o metas de las entidades contratantes.

V. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente propuesta se dicta como complemento y desarrollo de las disposiciones contenidas en la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

Asimismo, conforme ya se sustentó líneas arriba, a partir de la vigencia de la Ley N° 32069 y su Reglamento, resulta pertinente una nueva regulación complementaria a través de directiva así como disponer la derogación de la Resolución N° 062-2019-OSCE/PRE, que formaliza la aprobación de la Directiva N° 010-2019-OSCE/CD “Acciones de supervisión a pedido de parte y de oficio”.

⁴ Ver en: <https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2025/Enero/22/EXP-DS-009-2025-EF.pdf>.